

**REVISIÓN DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE
LA MATERIA DE CONSULTA POPULAR 1/2020
PETICIONARIO: PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA.**

**ENCARGADO DEL ENGROSE: MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR
MORALES
SECRETARIO: LUIS ALBERTO TREJO OSORNIO**

Visto bueno
Señor Ministro

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, correspondiente al **uno de octubre de dos mil
veinte.**

**VISTOS; Y
RESULTANDO:**

Cotejó

1. **PRIMERO. Petición de la consulta.** Mediante escrito presentado el quince de septiembre de dos mil veinte, ante la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12, fracción I, de la Ley Federal de Consulta Popular, presentó una petición de consulta popular cuyo propósito y trascendencia sustentó en las siguientes consideraciones:

“El suscrito, Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere la Ley Federal de Consulta Popular en su capítulo II, artículo 12, fracción I, presento formalmente a ustedes la siguiente petición de consulta popular para la jornada electoral que habrá de celebrarse el domingo 6 de junio de 2021 o en la fecha que establece el recién reformado artículo 35 de la Constitución, a fin de preguntar al pueblo de México sobre el asunto de trascendencia nacional que se describe y fundamenta en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERO. Entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018 México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado de derecho en extensas zonas del territorio nacional. Esa etapa trágica en la vida del país se denomina periodo neoliberal o neoporfirista.

SEGUNDO. Los males señalados en el párrafo anterior no ocurrieron de manera fortuita sino que fueron consecuencia de la aplicación, durante cinco sexenios, de un modelo político y económico elitista, antidemocrático, antinacional y antipopular. Las más altas esferas del poder público, y específicamente quienes ejercieron la titularidad del Poder Ejecutivo, dieron fe en innumerables ocasiones, tanto de palabra como en los hechos, de su adhesión a las políticas privatizadoras, su determinación de privilegiar a los grandes poderes económicos y de su empeñamiento en estrategias de seguridad violentas, inhumanas y contraproducentes. En suma, los desastres humanos, sociales y nacionales sufridos por el país durante esos treinta años fueron resultado de una suma de actos voluntarios y racionales por parte de quienes lo gobernaron en ese lapso.

TERCERO. El neoliberalismo gobernante se tradujo en la pérdida de centenares de miles de vidas, en decenas de miles de desapariciones, en la conculcación de derechos políticos y sociales, en el crecimiento de la pobreza, la desigualdad, la marginación, la informalidad y la descomposición social, en el deterioro sostenido de los sistemas públicos de salud y educación, en la desprotección de millones de jóvenes y adultos mayores, en el acoso depredador en contra de las comunidades indígenas, en un pronunciado deterioro de las instituciones, en la pérdida de soberanía y en la devastación de las industrias petrolera y eléctrica, entre otras consecuencias graves.

CUARTO. La desigualdad en México se profundizó precisamente durante el periodo neoliberal o neoporfirista. Según cifras del Banco Mundial y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), fue en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando crecieron más en nuestro país las diferencias económicas y sociales entre ricos y pobres, y no es casual que al mismo tiempo se entregó a particulares nacionales o extranjeros una cantidad sin precedentes de bienes públicos. Un dato: en julio de 1988, cuando Salinas fue impuesto mediante un fraude electoral, en la lista de la revista Forbes -en la cual figuran las personas más ricas del mundo-

REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA MATERIA DE CONSULTA POPULAR 1/2020

, solo aparecía una familia mexicana, la de los Garza Sada, con dos mil millones de dólares; pero al finalizar aquel sexenio, ya estaban incorporados a ese listado otros veinticuatro mexicanos, que poseían en conjunto más de cuarenta y cuatro mil millones de dólares. Casi todos ellos, habían sido beneficiados con empresas, minas y bancos que antes eran propiedad de los mexicanos. Luego de estar colocado en 1988 en el lugar 26 entre los países del mundo con más multimillonarios, en 1994 México escaló al cuarto sitio, solo por debajo de Estados Unidos, Japón y Alemania.

QUINTO. El presidente Ernesto Zedillo continuó las políticas privatizadoras de su antecesor y las llevó hasta sus últimas consecuencias: privatizó bienes nacionales como los Ferrocarriles pero además adjudicó al conjunto de los mexicanos deudas privadas por un monto de 552 mil millones de pesos en el marco del ‘rescate bancario’ de 1998. A la fecha, aunque el país ha pagado a los bancos 700 mil millones de pesos por bonos del Fobaproa, esa deuda pública asciende a cerca de dos billones y no terminará de saldarse sino hasta el año 2070.

SEXTO. Vicente Fox Quesada llegó a Los Pinos como resultado del anhelo social de alcanzar la democracia y la alternancia. Sin embargo, cuando se acercaba el final de su gestión intervino indebida e ilegalmente en el proceso electoral a fin de impedir el triunfo de la oposición. Tal intromisión no solo fue reconocida en el fallo con el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) legalizó el turbio proceso electoral de 2006 sino por el propio Fox, quien, al año siguiente, en una entrevista con Telemundo, admitió que ‘era importante detener a López Obrador’, y en 2010 se jactó de haber ‘cargado los dados’ del proceso electoral. De esa forma, traicionó el mandato democrático al que se debía y los principios mismos de la democracia.

SÉPTIMO. Desde el inicio de su sexenio, Felipe Calderón Hinojosa embarcó al país en una estrategia militar supuestamente orientada a ‘combatir el narcotráfico’ que exacerbó la violencia y multiplicó las zonas del territorio nacional bajo control de las bandas delictivas, pese a las innumerables y conocidas advertencias de que tal política habría de resultar contraproducente y terriblemente costosa para México. Lo más grave: colaboradores suyos y periodistas independientes le señalaron los indicios de que su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, era cómplice de una de las facciones del narcotráfico, pero el gobernante no hizo nada. A la luz de la detención y el enjuiciamiento de García Luna en Estados Unidos, la actitud de Calderón solo puede explicarse como fruto de

una extremada irresponsabilidad o de complicidad activa o pasiva con la delincuencia organizada.

OCTAVO. La irrupción de grandes cantidades de dinero de procedencia desconocida en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto fue señalada desde 2012, sin que ello tuviera consecuencias legales o llevara al TEPJF a anular la elección, como en ese tiempo, desde la oposición formalmente lo exigimos. Sin embargo, declaraciones recientes de Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex durante el sexenio de Peña, han permitido documentar que parte de ese dinero provino de sobornos anticipados de la empresa Odebrecht. Por otra parte, los señalamientos de Lozoya apuntan a la presunta complicidad de Peña Nieto en las cuantiosas sumas de dinero que se entregaron a legisladores del PAN para obtener los votos y la aprobación de la llamada reforma energética, así como en la compra fraudulenta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, operación que causó al erario un quebranto superior a los 200 millones de dólares.

NOVENO. Los hechos referidos en los párrafos anteriores, más muchas otras calamidades no relatadas en aras de la brevedad, generaron una creciente e inocultable indignación que desembocó en múltiples exigencias de justicia en sectores ampliamente mayoritarios de la sociedad mexicana. Tales exigencias se toparon con una diversidad de mecanismos de encubrimiento e impunidad, con la adulteración de disposiciones legales, con las componendas de los partidos subordinados al régimen, con el silencio cómplice de la mayoría de los medios de información nacionales y extranjeros, con acuerdos tácitos de protección entre los presidentes salientes y los entrantes y con aparatos de procuración de justicia puestos al servicio de los propios gobernantes.

DÉCIMO. Desde el primer día de mi gobierno se han incrementado las peticiones populares de esclarecimiento y justicia para las acciones presuntamente delictivas que posiblemente cometieron los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto en el ejercicio del cargo. No obstante, el masivo clamor de justicia se enfrenta a zonas grises del marco legal, como las limitaciones que establece el artículo 108 constitucional, en curso de modificación, para actuar penalmente en contra de un presidente en funciones, o como la consideración de delitos imprescriptibles que los mencionados habrían podido cometer en el ejercicio de la Presidencia.

REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA MATERIA DE CONSULTA POPULAR 1/2020

DÉCIMO PRIMERO. El país se encuentra, en este punto, en una situación en la que una demanda social mayoritaria carece de un cauce institucional nítido y de una vía clara de expresión en las leyes vigentes y en la que es ineludible que el Estado emprenda un proceso de esclarecimiento a este respecto. En mi calidad de Presidente de la República considero necesario avanzar en el discernimiento de este punto, sin estridencias, con responsabilidad, pero anteponiendo en todo momento el predominio de la voluntad popular y el respeto irrestricto de la legalidad.

DÉCIMO SEGUNDO. Independientemente del curso que tomen las acciones legales en los procesos en contra de diversos ex funcionarios, tanto en México como en el extranjero, la decisión de si debe esclarecerse en términos legales la actuación de los cinco ex presidentes referidos ha de considerarse un tema de trascendencia nacional y que por su proyección histórica y sus implicaciones políticas amerita ser puesto a la consideración de la ciudadanía en un espíritu de democracia participativa. Es pertinente señalar que no es ésta la primera ocasión en la que promuevo tales ejercicios; se han realizado con respecto a la construcción del aeropuerto en Texcoco, la planta eléctrica de Huesca, Morelos, la cervecera en Mexicali y el Tren Maya, y he promovido la inclusión en la Carta Magna de las consultas regulares de revocación de mandato.

DÉCIMO TERCERO. En mi toma de posesión, consciente de la relevancia y las implicaciones de juzgar penalmente a quienes ejercieron la Presidencia, propuse la realización de una consulta popular como un paso necesario para resolver sobre este delicado asunto. Si el pueblo da su aprobación, las instituciones responsables de desahogar las potenciales acusaciones tendrán un enorme respaldo para realizar esa tarea con absoluta libertad; si rechaza la propuesta, nadie podrá acusarlas de encubrir o solapar conductas ilegales. En lo personal, reafirmo la postura que he sostenido siempre sobre este tema, en el sentido de que en el terreno de la justicia se pueden castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir. He dicho y reitero, que yo votaría por no someter a los expresidentes a proceso. Sin embargo, de realizarse la consulta, respetaré el fallo popular, sea cual sea, porque en la democracia el pueblo decide, y por convicción me he propuesto mandar obedeciendo. En otras palabras, nunca traicionaré la confianza del pueblo y no seré cómplice de la impunidad ni voy a ser tapadera de acciones turbias del pasado, pero tampoco pretendo impulsar represalias contra nadie porque, como lo he afirmado en numerosas ocasiones, no es mi fuerte la venganza.

DÉCIMO CUARTO. El ejercicio de la consulta popular sobre la viabilidad de iniciar procesos legales en contra de los ex presidentes es en sí mismo un precedente necesario para prevenir la repetición de conductas indebidas en el ejercicio del poder y un deslinde con respecto a la impunidad y encubrimiento que caracterizó a los gobiernos neoliberales, una forma de despejar la ambigüedad legal que ha imperado sobre las responsabilidades de la figura presidencial y una reafirmación del principio de soberanía popular contenido en el artículo 39 de nuestra Constitución Política.

DÉCIMO QUINTO. La presente petición no contraviene la limitación establecida en el numeral 3º, fracción VIII del artículo 35 constitucional, en el sentido de que ‘no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, ni las garantías para su protección’, por cuanto la consulta solicitada tiene el propósito central de llevar a un cauce legal claro un asunto de interés general y trascendencia nacional y posibilitar, en su caso, juicios apegados a derecho y respetuosos del debido proceso. Por el contrario, la consulta pedida reafirma el derecho a participar en los asuntos públicos estipulado en el artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y reafirma el derecho a la justicia plasmado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DÉCIMO SEXTO. El tema que motiva la presente petición de consulta popular repercute en todo el territorio nacional e involucra al conjunto de la población, en términos del artículo 6 de la Ley Federal de Consulta Popular, al estar involucrados sus intereses e instituciones y dado que los hechos que la originan revisten por sí mismos una importancia y gravedad tal, que es preciso someterlos a este mecanismo de participación ciudadana.

PREGUNTA DE LA CONSULTA POPULAR

En consecuencia y en cumplimiento a la fracción III del artículo 21 de la Ley Federal de Consulta Popular, propongo la siguiente pregunta:

¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

2. **SEGUNDO. Remisión de la solicitud de la consulta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.** Por oficio DGPL/1P3A-1677 de quince de septiembre de dos mil veinte, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores informó al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la presentación de la referida petición, la que remitió a este Alto Tribunal a efecto de que resolviera sobre su constitucionalidad.
3. **TERCERO. Radicación, admisión y turno del expediente.** Por acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación **admitió** a trámite el expediente relativo a la revisión de la constitucionalidad de la materia de la consulta popular, la que fue registrada bajo el expediente 1/2020, y siguiendo el orden de turno por decanato, ordenó su remisión al Ministro Luis María Aguilar Morales para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
4. **CUARTO. Proyecto de resolución, deliberación y engrose con la posición de la mayoría.** El veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, el Ministro Luis María Aguilar Morales presentó al Pleno un proyecto de resolución en el que propuso declarar inconstitucional la materia de la consulta popular.
5. Sin embargo, en sesión de uno de octubre siguiente, este Tribunal Pleno discutió el asunto y, por mayoría de seis votos en contra de la propuesta original, se determinó rechazar el proyecto presentado, por lo que se encargó al Ministro Luis María Aguilar Morales que redactara la posición mayoritaria de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de los argumentos expuestos en la sesión plenaria, como a continuación se expresa.
6. Al respecto, importa destacar que los puntos resolutiveos que se aprobaron en sesión de uno de octubre de dos mil veinte por este

Tribunal Pleno, fueron notificados a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión ese mismo día a las diecisiete horas con veintiocho minutos.

CONSIDERANDO:

7. **PRIMERO. Competencia.** Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación **es competente** para conocer y resolver la presente revisión de constitucionalidad de la materia de la consulta popular, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, fracción VIII, numeral 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 5, 6, 12, fracción I, 13, 17, 21 y 26 de la Ley Federal de Consulta Popular; 14, fracción II, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto Segundo, fracción XIII, del Acuerdo General 5/2013.
8. **SEGUNDO. Legitimación.** La solicitud de mérito fue presentada por el Presidente de la República, motivo por el cual **debe reconocérsele legitimación** para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, fracción I, de la Ley Federal de Consulta Popular, en el que se faculta, entre otros entes legitimados, al Titular del Poder Ejecutivo Federal para solicitar una consulta popular.
9. En este sentido, es importante reiterar que la consulta, junto con la propuesta de pregunta formulada, fue presentada ante la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la Ley Federal de Consulta Popular quien, a través de su titular, en cumplimiento a lo referido en el artículo 26, fracción I, de dicha Ley, la remitió a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
10. **TERCERO. Oportunidad.** De acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la Ley Federal de Consulta Popular, la petición correspondiente podrá presentarse ante las cámaras del Congreso de la Unión a partir del uno de septiembre del segundo año de ejercicio de cada legislatura

**REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA
MATERIA DE CONSULTA POPULAR 1/2020**

y hasta el quince de septiembre del año previo al en
que se realice la jornada electoral federal.

11. En este caso, **la petición de consulta fue presentada el quince de septiembre de dos mil veinte** ante la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República que, de conformidad con el artículo 65 de la Constitución General, comenzó su segundo año legislativo el uno de septiembre del presente año, de ahí que se estime que su presentación es **oportuna**.
12. **CUARTO. Procedencia de la revisión.** La revisión de la solicitud de consulta popular **es procedente**, en términos de los artículos 35, fracción VIII, numeral 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 21 de la Ley Federal de Consulta Popular, pues proviene de una petición hecha por el Presidente de la República, presentada por escrito, precisa el nombre y firma del peticionario, el propósito de la consulta, así como los argumentos por los que considera que es un tema de trascendencia nacional y la propuesta de una pregunta para la consulta. Además, la solicitud fue presentada ante una de las Cámaras del Congreso de la Unión —Senado de la República— quien la remitió a esta Suprema Corte para la calificación de la constitucionalidad del objeto de la consulta y la pregunta propuesta.
13. A diferencia de lo que ocurre con las peticiones formuladas por ciudadanas y ciudadanos —en las que la Suprema Corte debe revisar la trascendencia de la consulta—, la Ley Federal de Consulta Popular no contempla que este Tribunal Constitucional deba realizar ese análisis cuando el peticionario es el Presidente de la República. Por el contrario, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5º de la Ley Federal, la trascendencia nacional de los temas propuestos para consulta popular, será calificada por la mayoría de los legisladores presentes en la Cámara correspondiente.

14. **QUINTO. Estudio de la constitucionalidad de la materia de la consulta.** Este Tribunal Pleno dividirá el presente apartado de la siguiente manera. En primer lugar, se determinará la metodología aplicable; posteriormente, se procederá a evaluar la petición formulada por el Presidente de la República.

15. **I. Metodología.**

16. Este apartado metodológico aborda tres cuestiones: a) Qué tipo de función ejercemos en este caso; b) Qué naturaleza y ámbito de aplicación tiene la consulta popular; y c) Cómo abordar el estudio de la petición formulada por el Presidente de la República.

17. Las tres conclusiones metodológicas acogidas en esta resolución son las siguientes: 1) No se ejerce una función jurisdiccional sino una función de control *ex ante* dentro de un procedimiento dirigido al ejercicio de un derecho de participación política; 2) La consulta popular es un derecho humano cuyo ámbito de aplicación se centra en las facultades discrecionales de los órganos representativos, y 3) La identificación de la materia de la consulta se debe hacer a la luz de todos los elementos de la petición y debe preferirse aquella descripción que, en igualdad de condiciones, maximice el ejercicio del derecho a la consulta.

18. **Función no jurisdiccional de control de esta Suprema Corte.**

19. La resolución del presente asunto no se realiza en ejercicio de facultades jurisdiccionales. Por tanto, la intervención de esta Corte no tiene el propósito de resolver en estricto sentido una controversia jurídica de naturaleza constitucional, ni, por tanto, de calificar una pretensión como fundada o infundada. La función que hoy ejercemos es una función de control *ex ante*, dentro de un procedimiento no jurisdiccional, iniciado por la petición realizada por el Presidente de la República para detonar el mecanismo de consulta popular, previsto en el artículo 35, fracción VIII de la Constitución Federal.

20. Esta premisa tiene dos implicaciones metodológicas. La primera es que en el presente asunto no existe una *litis* que deba fijarse por el punto de encuentro de dos pretensiones opuestas. Por ello, el estándar de evaluación de las razones de la petición, ahora sometida a nuestra consideración, no es el aplicable a pretensiones que buscan vencer un juicio con una sentencia que adquiera valor de cosa juzgada, sino definir uno aplicable a los procesos de control para determinar si una solicitud cumple con los requisitos jurídicos mínimos para acceder a un derecho constitucional.
21. La segunda, consecuencia de lo anterior, consiste en que al no existir una *litis* en la presente petición, no es preciso establecerla —fijarla— ni tiene sentido hacer referencia a la obligación general de este Tribunal de no modificarla. Lo que hoy debemos decidir es si la petición presentada a nuestra consideración se ubica en la regla general de acceso al referido mecanismo de participación política, o si se actualiza una de las excepciones que impediría su realización.
22. Conforme a nuestra doctrina, las autoridades encargadas de tramitar un procedimiento, del que depende el ejercicio de un derecho constitucional, tienen la obligación de no interponer obstáculos innecesarios y de aplicar las herramientas metodológicas impuestas por el artículo 1º, tercer párrafo, de la Constitución: los principios pro persona y progresividad.
23. Como en todo proceso no jurisdiccional entablado para acceder al ejercicio de un derecho humano, la petición inicial no necesariamente debe venir acompañada de razones jurídicas absolutamente exactas. En la función de control no jurisdiccional no se contabilizan las deficiencias jurídicas de los planteamientos del solicitante, a diferencia de lo que ocurre en la función jurisdiccional.

24. **Estructura jurídica y ámbito de aplicación del derecho de consulta popular.**
25. La consulta popular es un derecho humano de carácter político de fuente constitucional y convencional, previsto en los artículos 35 constitucional, 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este derecho permite la participación ciudadana, la posibilidad de expresarse y decidir en un entorno democrático, así como la de opinar activamente en los asuntos públicos.
26. En el marco constitucional federal, la norma precisa que el mecanismo de participación hoy invocado tiene como correlativo un derecho constitucional de la ciudadanía. El artículo 35, fracción VIII, establece que es un “derecho de la ciudadanía” “votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional”. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y sus garantías; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la permanencia en el cargo de los servidores públicos de elección popular; la materia electoral; el sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación; las obras de infraestructura en ejecución, y la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.
27. Así, la consulta popular empodera a los ciudadanos para influir en las decisiones más allá del límite impuesto por un sistema puro de democracia indirecta. Con su ejercicio, los ciudadanos ya no sólo se limitan a influir en la integración de los órganos representativos, sino también a expresar su opinión, con el resultado de que, reunidos ciertos requisitos procesales, ésta pueda ser vinculante.
28. De manera que si esta Suprema Corte actúa como un eslabón dentro de un proceso democrático que busca hacer efectivo el derecho de la

**REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA
MATERIA DE CONSULTA POPULAR 1/2020**

ciudadanía a ser consultada en temas de trascendencia nacional o regional, debe optar, al resolver sobre la constitucionalidad de la materia, por una interpretación que favorezca en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Es claro, entonces, que esta Corte debe impedir que se sometan a consulta temas que impliquen una restricción de derechos humanos, pero también debe garantizar, en los términos más amplios, el derecho a la consulta popular.

29. Éstas son las implicaciones de ser el Tribunal garante de un constitucionalismo democrático, el cual reconoce componentes no disponibles para la mayoría (derechos humanos y sus garantías), como aquellos que obligan a garantizar ampliamente la participación política. Corresponde, entonces, a esta Suprema Corte equilibrarlos en cada caso.
30. ¿Es la consulta un requisito o condición de ejercicio de algunas facultades jurídicas de las autoridades mexicanas? En otras palabras, ¿Es necesario que la población determine que las autoridades deben ejercer sus competencias de cierto modo para éstas actúen en consecuencia? La respuesta categórica es no. Todas las facultades de nuestro sistema jurídico son suficientes por sí mismas para ejercerse sin necesidad de la consulta. Sin embargo, ese no es ni el propósito de la introducción de dicha figura mediante la reforma constitucional de dos mil doce, ni su funcionalidad.
31. Este Pleno concluye que la consulta popular tiene un ámbito de aplicación que se extiende sobre la totalidad de facultades discrecionales y no regladas de los órganos representativos, sin desplazarlas ni sustituirlas, sino para vincular a sus titulares a considerar la opinión de la población justo ahí donde se puede generar crisis de representación.

32. Este Pleno quiere ser muy claro en sus premisas. Con toda la trascendencia que tiene el derecho de consulta como un derecho humano que debe garantizarse en términos amplios y como una figura de democracia semi-directa, este Pleno reitera que éste no reemplaza ninguna competencia prevista en la parte orgánica de la Constitución, ni puede erigirse como una condición de ejercicio de alguna de ellas. Es decir:
33. - Aceptar que una petición de consulta actualiza la regla general de acceso al derecho a la consulta popular no supone dotar de un blindaje constitucional —que impida su estudio posterior— a las normas o actos emitidos eventualmente en cumplimiento de la opinión de la población.
34. - Aceptar la consulta implica reconocer que la ciudadanía tiene el derecho de opinar sobre un tema de trascendencia nacional o regional que atañe a los órganos involucrados. Lo que éstos hagan para cumplir con esos insumos de consideración vinculante serán oportunamente evaluados, en su regularidad constitucional, mediante los medios jurisdiccionales existentes tanto de control concentrado como difuso.
35. Consecuentemente, los órganos del Estado deben decidir, con cierto margen de apreciación, qué curso de acción tomarán para tramitar esos insumos de consideración vinculante que produce la consulta popular; a esta Suprema Corte en esta etapa en la que sólo se controla la constitucionalidad de la materia de la consulta y se decide la legalidad de la pregunta, no concierne agotar el estudio de las posibilidades lógicas de acción de las autoridades vinculadas. Su determinación y la decisión sobre su adecuación y pertinencia constitucional corresponderá a los órganos de control judicial competentes.
36. Estas conclusiones se basan en los motivos del Constituyente Permanente como fueron expresados en la reforma constitucional de

2012. Como se observa del proceso de reforma respectivo, éste optó por la consulta popular porque — en sus propias palabras— no quería desplazar ningún otro mecanismo de democracia representativa. En la discusión de la reforma se puede observar que en ese intento descartó incluir al referéndum o al plebiscito, pues no quiso crear una nueva fuente del derecho.

37. Su propósito —se dijo— fue incluir a la consulta como un mecanismo para superar la pasividad de esos procesos de decisión, cuando los órganos encargados de ellos, principalmente el legislador y el ejecutivo, se encontraran paralizados. El derecho de consulta intenta resolver la crisis de representación, ya que con él se empoderó a la ciudadanía para vincular a los poderes a tomar en consideración sus opiniones.
38. Aunque —como ya se dijo— la consulta popular es un derecho y un mecanismo de participación ciudadana que, ajustado a ciertos requisitos, supone la oportunidad ciudadana de participar en la producción normativa de facultades no regladas y de ejercicio discrecional de las autoridades competentes, debe, sin duda, excluirse de su ámbito de aplicación toda obligación o derecho, cuyo cumplimiento no sea potestativo para las autoridades. El cumplimiento y exigibilidad de las obligaciones jurídicas depende íntegramente del principio de legalidad y serán en todo caso, exigibles judicialmente.
39. Este Pleno concluye también que si bien en este momento no debemos definir una regla absoluta, sí podemos afirmar que se debe excluir del ámbito de aplicación de la consulta el cúmulo de competencias que sirven para garantizar derechos humanos, por ejemplo, el de acceso a la justicia. El texto constitucional no deja lugar a dudas. El numeral 3o. de la fracción VIII del artículo 35 constitucional establece contundentemente que no serán objeto de consulta *“la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni las*

garantías para su protección”. En este punto, esta Suprema Corte reitera su doctrina en cuanto a la existencia de garantías orgánicas para la protección de los derechos humanos frente a las facultades de la autoridad. Ahora explicamos las razones de esta conclusión.

40. La consulta popular no pretende desplazar ninguna potestad normativa. Su materia no son las facultades en sí de las autoridades, sino “*temas de trascendencia*”, ya sea nacional o regional, relacionados con éstas. Su propósito —como derecho humano— es vincular a las autoridades —no a ejercer sus facultades discrecionales en cierto sentido concreto— sino a considerar como vinculante la opinión de la ciudadanía al ejercer sus competencias. El contenido y alcance de esas competencias no se condiciona a ninguna consulta popular.
41. En este punto, el Pleno explicita aún más su criterio de que la consulta popular es útil principalmente para generar opiniones vinculantes sólo respecto de ciertas facultades discrecionales de los órganos representativos. El artículo 35, fracción VIII, numeral 2o. de la Constitución establece que “[c]uando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes”. El contenido de esta disposición constitucional revela, entonces, que la consulta popular no es una fuente de derecho de nuestro sistema jurídico; sin embargo, sí produce consideraciones vinculantes. En tanto este mecanismo no produce normas jurídicas, en cada caso concreto surgirán distintos grados y condiciones de vinculatoriedad para cada una de las autoridades involucradas. Veamos.
42. El gobierno federal tiene facultades expresas y limitadas; los estados, residuales. El punto medular de este diseño son las facultades legislativas, pues son la principal fuente configuradora del sistema. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados reciben facultades con amplios márgenes de libertad para producir normas. Los

poderes ejecutivos federal y locales detentan, a su vez, un cúmulo de facultades para ejecutar la ley, algunas regladas y otras discrecionales. Juntos, los poderes legislativos y ejecutivos, reúnen las principales facultades discrecionales del sistema. El modelo de democracia representativa espera que los titulares de esos órganos ejerzan su discreción respondiendo a las preferencias de las mayorías y sean responsables ante éstas de los resultados de las decisiones adoptadas. Por su parte, los derechos electorales permiten que la ciudadanía participe en la integración de esos órganos.

43. ¿Dónde ubicar a la consulta popular? Nuestro modelo constitucional reconoce que la democracia indirecta produce, algunas veces, problemas de representación; es decir, una eventual distancia entre las autoridades elegidas y sus electores. Dentro de la necesaria y compleja participación política, la consulta se ocupa de temas de trascendencia que sean pertinentes para alimentar el ejercicio de las facultades discrecionales de estos órganos representativos. Si bien la finalidad de la consulta es coadyuvar a la solución de los problemas de representación, aun sin consulta que les diga cómo y hasta dónde, las autoridades pueden y deben ejercer sus facultades discrecionales dentro del ámbito de sus competencias. La utilidad de la consulta es que —dado el caso— la ciudadanía aporte un insumo de consideración vinculante a la concreción de esas facultades.
44. La Constitución —como se ha insistido— determina que el derecho a ser consultado, aun cuando —como derecho humano— debe interpretarse expansivamente, acepta ciertos límites constitucionales precisos, previstos en el numeral 3o. de la fracción VIII del artículo 35 constitucional.
45. Cuando la Constitución atribuye competencias de ejercicio obligatorio, particularmente, cuando las mismas se atribuyen a un conjunto de órganos de naturaleza no representativa, como son los poderes

judiciales o las fiscalías, éstas suelen constituir garantías orgánicas de derechos humanos en específico. Sus facultades se diseñan justo para que estos órganos no se comporten de acuerdo con las preferencias de las mayorías, y su función protectora de los derechos humanos sea más eficaz. Por ello, sus prerrogativas son preponderantemente regladas y de ejercicio obligatorio y aquellas facultades discrecionales que se les asignan son para conducirse conforme a racionalidades técnicas o especializadas, distintas a las electorales. Sin garantías orgánicas de los derechos humanos no existiría una democracia y, por tanto, los temas que les atañen también quedan excluidos del ámbito de aplicación de la consulta popular.

46. **El estándar de análisis de la petición formulada por el Presidente de la República.**
47. En el presente caso, la petición de consulta popular fue presentada por el Presidente de la República, quien, de acuerdo al numeral 1o., inciso a) de la fracción VIII del artículo 35 constitucional, tiene legitimación para iniciar el trámite correspondiente. Habiendo determinado el alcance de la figura de consulta popular, debemos ocuparnos de la última pregunta metodológica: ¿Cómo analizar los términos de su petición?
48. El artículo 35, fracción VIII, de la Constitución Federal establece distintos supuestos de peticiones, cada uno con un tratamiento distinto. En el caso, nos ubicamos en la hipótesis de una petición presentada por el Presidente de la República, por lo que, en términos del último párrafo del numeral 1o. de dicha norma, se actualiza una fórmula de división de trabajo entre el Congreso de la Unión y esta Suprema Corte.
49. En términos de la Ley Federal de Consulta Popular, corresponde a esta Suprema Corte decidir si la materia de la consulta es constitucional, mientras que, al Congreso, mediante la aprobación de ambas Cámaras, le toca analizar su trascendencia.

**REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA
MATERIA DE CONSULTA POPULAR 1/2020**

50. Por tanto, todo lo que esta Suprema Corte tiene autorizado resolver es la constitucionalidad de la materia u objeto de la consulta y para ello, sólo puede utilizar como parámetro el numeral 3o. de la fracción VIII de la Constitución Federal. Así, este Pleno no considerará todas las razones de conveniencia, pertinencia o necesidad de la pregunta, pues estas cuestiones pertenecen más al ámbito de la trascendencia. Análisis vedado a este Tribunal.
51. Una primera cosa que se debe señalar, aunque la consulta resultare innecesaria para el ejercicio de las facultades de las autoridades, este hecho no demuestra la inconstitucionalidad de la materia. La necesidad o no de la consulta es competencia de las Cámaras del Congreso al calificar su trascendencia.
52. En apartados precedentes, este Tribunal Pleno ya ha desarrollado por qué no puede considerarse a la consulta popular como fuente de derechos ni una condición necesaria para el ejercicio de ninguna facultad; con ella o sin ella, los órganos del Estado podrían ejercer sus competencias. La finalidad de la consulta es otra: incidir en las decisiones discrecionales de los órganos representativos dentro del espacio que la Constitución reserva a esta figura jurídica, emitiendo una opinión vinculante sobre un tema de trascendencia para superar los posibles defectos del régimen representativo.
53. Así, para determinar si una petición de consulta popular se ubica en la regla general de procedencia o en los supuestos de restricción previstos en el numeral 3o. de la fracción VIII del artículo 35 constitucional, en primer lugar, debe identificarse el objeto de la consulta y, sólo de comprobarse que su objeto o materia no actualiza algunas de las referidas restricciones, se debe proceder a calificar la legalidad de la pregunta. En resumen: existen por separado una materia de la consulta y una pregunta que le da eficacia; la primera es sustantiva y la segunda

es adjetiva o formal; sendos elementos de un mismo componente. En tal razón, a este Tribunal Supremo le atañe ocuparse de los aspectos jurídicos de este proceso, no de los políticos ni de los ideológicos que, como se dijo, pertenecen en todo caso a otro ámbito de Poder.

54. Siguiendo estas premisas, lo primero que este Pleno definirá consiste en determinar cuál es el objeto de la consulta acudiendo a sus facultades de apreciación. En la ley no se exige que los peticionarios identifiquen dicho objeto, ya que todo lo que deben acompañar a su petición son los requisitos establecidos en el artículo 21 de la Ley de la materia, consistentes en el nombre completo y firma del solicitante, el propósito de la consulta y los argumentos por los cuales el tema se considera de trascendencia nacional, así como una pregunta. En este punto, recordamos que nuestra obligación constitucional no es identificar pasivamente una *litis*, y resolverla. Ya hemos expuesto la metodología con la que abordaremos la identificación y análisis de la materia en este proceso.
55. La norma constitucional sólo exige que la petición de la consulta verse sobre un “tema de trascendencia” nacional o regional. Conforme a lo expuesto, lo que a esta Suprema Corte corresponde evaluar es si la materia de la consulta se constriñe a una temática que no actualice algunas de las restricciones previstas en el numeral 3o. de la fracción VIII del artículo 35 constitucional. El peticionario no debe cumplir un estándar de motivación técnicamente impecable.
56. Para ese análisis, el Tribunal Pleno debe atender, por un lado, a la integralidad de las razones contenidas en la solicitud planteada y por otro, hacerlo favoreciendo la protección más amplia del derecho humano a la consulta. Esto significa que aun si el peticionario hiciese una relación de facultades de autoridades no conectadas con la temática que propone como objeto de la consulta, este Pleno estaría obligado a declarar constitucional la materia si constata que el tema es

REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA MATERIA DE CONSULTA POPULAR 1/2020

procedente conforme a los estándares constitucionales, en sujeción a los principios pro persona y de progresividad.

57. Como este Pleno ha reiterado en sus precedentes sobre constitucionalidad de consulta popular, su materia u objeto debe obtenerse a partir del análisis de todos los elementos de la petición. Esta es una metodología que utilizamos y aprobamos en todos los asuntos en los que hemos analizado la regularidad constitucional de una pregunta que pretende someterse a consulta popular. Así lo hicimos en los expedientes 1/2014¹, 2/2014², 3/2014³ y 4/2014⁴.
58. En esos asuntos, sin embargo, no se examinó pregunta alguna al estimarse que la materia de ellas no era constitucional; por tanto, de ser

¹ Revisión de la constitucionalidad de la materia de consulta popular 1/2014, resuelta por el Pleno el 30 de octubre de 2014, por mayoría de 9 votos de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo con salvedades, Aguilar Morales con salvedades, **Sánchez Cordero de García Villegas (ponente)**, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza, a favor de declarar inconstitucional la materia de la consulta popular por estar relacionada con el concepto de ingresos del Estado. El Ministro Cossío Díaz votó en contra.

² Revisión de la constitucionalidad de la materia de consulta popular 2/2014, resuelta por el Pleno el 29 de octubre de 2014, por mayoría de 6 votos de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Zaldívar Lelo de Larrea y Sánchez Cordero de García Villegas, por estar relacionada con una restricción de derechos humanos, y de los Ministros Luna Ramos, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales por incidir en los ingresos y gastos del Estado, se declaró inconstitucional la materia de la consulta relacionada con la cuantificación de los salarios mínimos. Los Ministros **Cossío Díaz (ponente)**, Franco González Salas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza votaron en contra.

³ Revisión de la constitucionalidad de la materia de consulta popular 3/2014, resuelta por el Pleno el 30 de octubre de 2014, por mayoría de 9 votos de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, **Luna Ramos (ponente)**, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza a favor de declarar inconstitucional la materia de consulta popular por involucrar ingresos del Estado (se pretendía consultar la vigencia de la reforma en materia energética). El Ministro Cossío Díaz votó en contra.

⁴ Revisión de la constitucionalidad de la materia de consulta popular 4/2014, resuelta por el Pleno el 3 de noviembre de 2014, por unanimidad de 9 votos de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, **Franco González Salas (ponente)**, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo en contra de las consideraciones, Aguilar Morales en contra de las consideraciones, Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Silva Meza, en el sentido de que es inconstitucional la materia de la consulta solicitada con relación a la disminución de diputaciones plurinominales, por tratarse de un tema electoral.

este el caso, por vez primera se alcanzaría a calificar la legalidad de la pregunta y su eventual modificación. Para llegar a ello, debe ponderarse primero que si de la lectura de todos los elementos de la petición se desprenden diversas hipótesis sobre su objeto y se advierte que éstas son igualmente razonables, surgirá la interrogante: ¿qué criterio debe utilizarse para escoger una por encima de las otras? Para este Pleno, la respuesta es elegir aquella que maximice el derecho de consulta popular, como derecho humano, al que le serán aplicables desde luego los principios *pro persona* y de progresividad.

59. Así, obviamente, sólo si se califica como constitucional la materia de la consulta, debe procederse a estudiar la legalidad de la pregunta y, en su caso, modificarla.

60. **II. Evaluación de la presente petición.**

61. De la lectura de la exposición de motivos, se percibe —en sus primeros ocho considerandos— la opinión del peticionario sobre diversos problemas de interés público, así como el contexto en que se desarrollaron. Ahí el peticionario describe los problemas sociales ocurridos en el pasado, e impulsados, en su apreciación, por actores políticos relevantes. A partir del considerando noveno, se expone medularmente la materia de la consulta: el Presidente de la República indica que la demanda social de “*esclarecimiento*” de los hechos y actuaciones del pasado, no encuentra un cauce institucional claro.⁵ Con

⁵ “NOVENO. Los hechos referidos en los párrafos anteriores, más muchas otras calamidades no relatadas en aras de la brevedad, generaron una creciente e inocultable indignación que desembocó en múltiples exigencias de justicia en sectores ampliamente mayoritarios de la sociedad mexicana. Tales exigencias se toparon con una diversidad de mecanismos de encubrimiento e impunidad, (...).

DÉCIMO. Desde el primer día de mi gobierno se han incrementado las peticiones populares de esclarecimiento y justicia para las acciones presuntamente delictivas que posiblemente cometieron los ex presidentes (...).

DÉCIMO PRIMERO. El país se encuentra, en este punto, en una situación en la que una demanda social mayoritaria carece de un cauce institucional nítido y de una vía clara de expresión en las leyes vigentes y en la que es ineludible que el Estado emprenda un proceso de esclarecimiento a este respecto. En mi calidad de Presidente de la República considero necesario avanzar en el discernimiento de este punto, sin estridencias, con responsabilidad, pero anteponiendo en todo momento el predominio de la voluntad popular y el respeto irrestricto de la legalidad.

ello, el Presidente de la República hace referencia a un ámbito de facultades discrecionales que, por tanto, no están regladas y son independientes *“del curso que tomen las acciones legales en contra de diversos ex funcionarios”*⁶.

62. En el considerando décimo segundo señala que, con independencia de las acciones legales, la obtención y estudio de elementos para valorar las acciones de ese periodo tienen implicaciones históricas y políticas⁷. Por su parte, en el considerando décimo tercero hace referencia a que la consulta busca dar un respaldo a las *“instituciones responsables de desahogar las potenciales acusaciones”*.
63. Finalmente, en el considerando décimo quinto se afirma que no se restringen los derechos humanos, ya que el propósito central de la consulta *“es llevar un cauce legal claro un asunto de interés general”*, lo que “en su caso” podría desembocar en juicios apegados a derecho y respetuosos del debido proceso.
64. Estas motivaciones llevaron al Presidente de la República a proponer la siguiente pregunta:
65. ***“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de***

(...)

DÉCIMO QUINTO. La presente petición no contraviene la limitación establecida en el numeral 3º, fracción VIII del artículo 35 constitucional, en el sentido de que ‘no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, ni las garantías para su protección’, por cuanto la consulta solicitada tiene el propósito central de llevar a un cauce legal claro un asunto de interés general y trascendencia nacional y posibilitar, en su caso, juicios apegados a derecho y respetuosos del debido proceso. (...).” (énfasis añadido)

⁶ “DÉCIMO SEGUNDO. Independientemente del curso que tomen las acciones legales en los procesos en contra de diversos ex funcionarios, tanto en México como en el extranjero, la decisión de si debe esclarecerse en términos legales la actuación de los cinco ex presidentes referidos ha de considerarse un tema de trascendencia nacional y que por su proyección histórica y sus implicaciones políticas amerita ser puesto a la consideración de la ciudadanía en un espíritu de democracia participativa. (...)”. (énfasis añadido)

⁷ Véase el décimo segundo considerando de la exposición de motivos que se transcribió previamente.

delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

66. Con estos elementos en vista, este Pleno observa que existen dos posibles lecturas de la materia de la petición. Una primera supondría que el tema de la consulta son las facultades de las autoridades de procuración y administración de justicia, específicamente, aquellas destinadas a investigar y a sancionar a los responsables. Este entendimiento se une a la literalidad de los términos utilizados en la pregunta propuesta, pero no a los puntos centrales de la exposición de motivos, en los cuales no se subraya la importancia de los resultados de los eventuales procedimientos judiciales.
67. De aceptarse como materia de la consulta este primer supuesto, este Pleno tendría que concluir que la petición se ubica en el supuesto de excepción de procedencia del derecho a la consulta, pues las facultades de las instituciones de procuración y administración de justicia son garantías orgánicas de los derechos humanos de acceso a la justicia, de reparación de las víctimas y del derecho a la verdad, por lo que al someterse a consideración de la población si desean que dichas autoridades cumplan con sus obligaciones, se consultaría una restricción de los derechos humanos, lo que claramente desborda el ámbito de aplicación de la consulta popular.
68. Como quedó expuesto en el apartado previo, la consulta popular no puede ser utilizada, como se dijo, para incidir en las facultades obligatorias o regladas de órganos contra-mayoritarios, como las fiscalías o los poderes judiciales, de cuyo ejercicio depende la garantía de los derechos humanos. La consulta popular versaría, por tanto, sobre una de las materias vedadas y taxativamente delimitadas en el numeral 3o. de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución.

**REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA
MATERIA DE CONSULTA POPULAR 1/2020**

69. Sin embargo, este Pleno considera que es razonable acoger como potencial descripción una materia distinta, cuyo tema sería el esclarecimiento de hechos pasados mediante las facultades discrecionales de los órganos representativos que servirían para ese fin, sin interferir en el ámbito de garantías del derecho humano de acceso a la justicia y en la reparación de daños de las víctimas, entre otros derechos que podrían verse restringidos. Esta descripción permite expandir y garantizar el derecho humano de carácter político a la consulta popular.
70. Esta segunda descripción prioriza la exposición realizada por el Presidente de la República por encima de la literalidad de la pregunta. Esta materia no se ubicaría en ninguna de las restricciones previstas en el numeral 3o. de la fracción VIII del artículo 35 constitucional⁸.
71. Una vez que se identifican dos potenciales supuestos igualmente razonables para la materia de la consulta, este Pleno aplica la regla de preferencia, según la cual debe escogerse aquella que maximice el acceso al derecho humano de consulta, por lo que la segunda posibilidad aparece como la definición correcta del tema o materia de la consulta. Esta opción se corresponde con las razones contenidas en los considerandos de la petición. Estas consideraciones permiten observar que el Presidente de la República no busca delimitar únicamente el objeto de la consulta a las facultades de las autoridades de procuración y administración de justicia, pues los términos de su exposición no denotan una intención de hacer un uso eminentemente técnico de las palabras “*investigar*” o “*esclarecer*”. En su exposición no liga a las

⁸ Dicha disposición constitucional establece lo siguiente: “No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular; la materia electoral; el sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación; las obras de infraestructura en ejecución; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta;”

instituciones de procuración y administración de justicia al resultado de la consulta.

72. Aunque la pregunta propuesta por el Presidente hace referencia “a *las autoridades competentes*”, no es obvio que esto deba interpretarse como una intención de incluir a la Fiscalía o a los jueces, en términos técnicos y restringidos. Tan es así que en los considerandos, el peticionario afirma que, con independencia de los juicios que en su caso ocurran⁹, lo relevante es esclarecer la actuación de los titulares del Ejecutivo y, en todo momento, subraya las dimensiones histórica y política que supondría conocer los sucesos acontecidos¹⁰.
73. Para este Pleno, lo relevante es que en el escrito se haga referencia a la falta de un cauce legal nítido para impulsar esos procedimientos, y que las acusaciones y juicios —en su connotación técnica— sean anunciados como consecuencias hipotéticas o eventuales¹¹, sin ser el centro de su exposición. En este punto debe recordarse que las facultades de los fiscales y los poderes judiciales están claramente regladas en la Constitución, mientras que la petición nos remite a aquella parte del sistema jurídico donde no hay facultades regladas, sino discrecionales.
74. Debemos recordar que, en este momento, no ejercemos una función jurisdiccional. Resultaría inadecuado presumir que los términos utilizados en una petición necesariamente tendrán una connotación estrictamente técnica-jurídica. Como habíamos establecido, las razones de una petición no deben ser evaluadas como si se trataran de argumentos litigiosos que merecen ser calificados como fundados o infundados, sino que debemos interpretarlos en su sentido a la luz de la teleología del derecho a la consulta popular.

⁹ Véase el décimo segundo considerando de la exposición de motivos, que se transcribió con anterioridad.

¹⁰ Véase el noveno considerando de la exposición de motivos, que se transcribió con anterioridad.

¹¹ Véase el considerando décimo primero y el décimo quinto de la exposición de motivos que se transcribieron con anterioridad.

75. En suma, la descripción de la materia ahora definida como correcta de la consulta da cuenta de un punto central de la exposición del peticionario: los resultados de esos procedimientos tienen un valor propio e independiente de los juicios penales y, en su caso, generarían un respaldo para la eventual presentación de acusaciones, cuya suerte, además, no sería sujeta a consulta.
76. Esta interpretación transforma la materia de la consulta en constitucionalmente válida, pues no actualiza ninguna de las restricciones del numeral 3o. de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Federal. Una vez la población participe y se reúnan los requisitos necesarios para generar un resultado vinculante, el Presidente deberá encomendar a parte de sus órganos allegarse de elementos y evaluar los hechos ocurridos en el pasado y, de ser el caso, impulsar los procedimientos que correspondan. Esto no violaría ninguna norma jurídica, ya que el Ejecutivo no tiene una obligación de llevar estas acciones, pero tampoco existe ninguna norma que lo prohíba. La posibilidad de realizar investigaciones internas sobre determinados hechos relativos a la administración pública es una facultad inherente al Poder Ejecutivo. Un ámbito donde las mayorías pueden impulsar a ese poder representativo a tomar su voluntad como “*insumo de consideración vinculante*”, a partir de la cual determine los cursos de acción que considere convenientes¹².

¹² Así se advierte de los procesos legislativos que culminaron con la expedición de la Ley Federal de Consulta Popular. De manera destacada, el dictamen de la Cámara Revisora en la cual se determinó lo siguiente: “(...) Por lo expresado en los párrafos precedentes, los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos Segunda, consideramos de la mayor importancia, que con la expedición de la Ley, estaremos atendiendo una demanda de la sociedad, que se ha manifestado por lograr mayores espacios para la participación ciudadana, así como la preocupación y el interés de los Grupos Parlamentarios por **fortalecer nuestro sistema democrático a través de instrumentos legales que brinden legitimidad a los actos de gobierno**, al tiempo de dotar a la ciudadanía de instrumentos de empoderamiento vinculatorios con la toma de decisiones”.

77. Por su parte, si la población llegara a emitir una respuesta negativa, lo único que implicaría es que ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo, ni las autoridades competentes a las que refiere el artículo 35 constitucional, deben entenderse vinculadas a usar sus facultades discrecionales para ese fin; lo que no relevaría (ni al peticionario ni a ningún servidor público) de su obligación de denunciar aquellos hechos de los que tenga conocimiento y que puedan constituir un delito. En ambos casos, las respuestas de la población no tendrían ninguna interferencia en las facultades de los órganos de procuración ni administración de justicia, ni restringirían los derechos de las víctimas, ni el acceso a la justicia.
78. Antes dijimos que están fuera del ámbito de la consulta popular los temas relativos al cumplimiento de las obligaciones y facultades regladas. Por tanto, aun cuando la consulta produzca un resultado vinculante, las autoridades permanecerían obligadas a cumplir con aquellos contenidos no potestativos, como lo sería el régimen de prescripciones de las responsabilidades en cualquier materia de que se trate.
79. En conclusión de este Pleno, la materia u objeto de la consulta consiste en el esclarecimiento de hechos pasados en México, dentro de los cuales se incluye una diversidad de situaciones y hechos destacados por el peticionario como relevantes en su estudio por sus implicaciones históricas y políticas. Este tema tendría como ámbito de proyección las facultades discrecionales de los órganos representativos, especialmente, el Poder Ejecutivo, quienes, en caso de producirse un resultado vinculante de la población, tendrían abierto un abanico de posibilidades de cursos de acción: desde la creación de mecanismos novedosos para esclarecer algunos hechos en específico, como en algunos países que han decidido garantizar el derecho a la verdad, hasta mecanismos que permitieran a las autoridades competentes allegarse de elementos suficientes para iniciar procedimientos de

**REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA
MATERIA DE CONSULTA POPULAR 1/2020**

responsabilidad en términos de lo establecido por el
Título Cuarto de la Carta Suprema.

80. En tanto la materia de la consulta identificada en los términos establecidos, no actualiza ninguna de las restricciones del numeral 3o. de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Federal, este Pleno procede a calificar la legalidad de la pregunta.

81. **III. Legalidad de la pregunta.**

82. El artículo 26, fracción II, incisos a) y b) conforma el parámetro de control de la legalidad de la pregunta. Esta disposición establece lo siguiente:

*“Artículo 26. Cuando la petición de consulta popular provenga del Presidente de la República, se seguirá el siguiente procedimiento:
(...)*

II. Recibida la solicitud del Congreso para verificar la constitucionalidad de la petición de consulta popular, la Suprema Corte deberá:

a) Resolver sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta popular y revisar que la pregunta derive directamente de la materia de la consulta; no sea tendenciosa o contenga juicios de valor; emplee lenguaje neutro, sencillo y comprensible, y produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo.

b) Realizar las modificaciones conducentes a la pregunta, a fin de garantizar que la misma sea congruente con la materia de la consulta y cumpla con los criterios enunciados en el inciso anterior”.

83. Como se observa, la ley establece que una vez determinada la materia de la consulta y habiéndose calificado como constitucional, esta Suprema Corte debe proceder a evaluar la legalidad de la pregunta.

84. La disposición legal es precisa en determinar que los vicios de la pregunta propuesta inicialmente por el Presidente de la República no son motivo de invalidez de toda la petición, sino de corrección. Que frente a una propuesta de pregunta defectuosa, la legislación obligue a esta Suprema Corte a modificarla en lugar de desestimarla, es

congruente con la conclusión metodológica anunciada al inicio, consistente en que no ejercemos una función jurisdiccional, sino de control *ex ante* al interior de un procedimiento, cuyo propósito es potenciar el derecho de participación política, en el cual no cabe hablar de una *litis* específica.

85. Los términos utilizados por el legislador definen nítidamente el sentido y propósito de las facultades concedidas a este Tribunal para modificar la pregunta en cualquiera de sus aspectos para hacerla congruente con la materia de la consulta fijada previamente. El inciso a) de la fracción II del artículo 26 de la Ley de la materia obliga a esta Corte a verificar los siguientes requisitos: 1) Que la pregunta derive directamente de la materia de la consulta; 2) Que no sea tendenciosa o contenga juicios de valor, y 3) Que emplee lenguaje neutro, sencillo y comprensible y produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo.
86. El inciso b) de la referida porción normativa subraya que cualquier deficiencia en esos rubros amerita la realización de *“las modificaciones conducentes a la pregunta, a fin de garantizar que la misma sea congruente con la materia de la consulta y cumpla con los criterios enunciados en el inciso anterior”*.
87. La pregunta propuesta por el Presidente de la República es la siguiente:

“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”

88. Dicha pregunta guarda una relación parcial con la materia de la consulta; es inquisitoria al incluir a personas en concreto, no está formulada en lenguaje neutro, contiene un juicio de valor y tampoco produce una respuesta categórica en sentido positivo o negativo. Por ello, son dos los componentes de la pregunta que deben excluirse:

89. 1) Las locuciones referidas a la investigación y sanción por parte de las autoridades competentes, y
90. 2) Los nombres propios de las personas referidas.
91. Como se argumentó previamente, la exposición de motivos del Presidente de la República insiste en dar valor independiente a los actos de esclarecimiento de los hechos ocurridos en el pasado, destacando su importancia histórica y política: en la petición se colocan en un segundo orden los resultados de los eventuales procesos sancionatorios correspondientes. Con base en los argumentos del Presidente de la República, este Pleno concluye que el objeto de la consulta es el esclarecimiento de esos hechos mediante el ejercicio de facultades discrecionales de los órganos representativos.
92. Por tanto, este Pleno encuentra que la pregunta originalmente propuesta debe modificarse para hacerla congruente con el tema sobre el que se consultará a la población y purgarla de cualquier elemento que la vicie. Esta modificación partirá de que el objeto de la consulta es el esclarecimiento de los hechos en los términos precisados.
93. Por otra parte, también debe eliminarse la referencia a las personas específicas incluidas en la pregunta propuesta.
94. Ello es así, porque históricamente la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido consistente en entender que la prohibición de leyes privativas, prevista por el artículo 13 constitucional¹³, exige que las normas del orden jurídico nacional no estén dirigidas a personas nominalmente designadas.

¹³ “**Artículo 13.-** Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. (...)”.

95. Esto es, su ámbito personal de validez no puede fijarse atendiendo a criterios subjetivos; deben poderse aplicar a más de un caso individual previsto de antemano. Las normas pueden hacer clasificaciones conceptuales entre grupos de personas que, por su propia cuenta, se colocan en las hipótesis que condicionan sus supuestos de aplicación, pero no pueden seleccionar *ex profeso* a sus destinatarios (señalarlos con nombre y apellido) y colocarlos en el supuesto de hecho por la sola razón de ser quienes son. Esta prohibición busca respetar los principios de generalidad y abstracción que en un estado constitucional de derecho se ha de predicar de las normas jurídicas¹⁴. Se garantiza así que las personas sean siempre tratadas en condiciones de igualdad, sin ventajas o desventajas creadas por ministerio de ley.
96. A juicio de este Pleno, el producto de una consulta popular también debe respetar esa prohibición, pese a que no puede ser considerada una ley propiamente. Como se determinó al inicio, el producto de la consulta popular debe ser entendido como un insumo de consideración vinculante para las autoridades. Esto quiere decir que guarda autonomía respecto al resto de los procesos de producción normativa. De cualquier forma, el resultado de la consulta sí tiene un fin práctico, siempre en función de la opción elegida por la ciudadanía.
97. Por esta razón, la pregunta que se pondrá a la vista de los votantes debe respetar el significado que nuestra jurisprudencia siempre ha atribuido al artículo 13 constitucional y, consecuentemente, no puede estar dirigido a un grupo de personas identificable por nombre y apellido.

¹⁴ Son muchos los criterios aislados y jurisprudenciales que reiteran estas notas esenciales de nuestra doctrina. Podrían consultarse, a manera de ejemplo, la tesis P. XII/2008 de Pleno de rubro “CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA Y DE PROCEDIMIENTOS RELATIVA, NO ES UNA LEY PRIVATIVA (DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL 13 DE ENERO DE 2005).”, la tesis P. CXXXV/97 de rubro: “IGUALDAD. LAS GARANTÍAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 13 CONSTITUCIONAL LA CONSAGRAN, EN EL ASPECTO JURISDICCIONAL, PROHIBIENDO LAS LEYES PRIVATIVAS, LOS TRIBUNALES ESPECIALES Y LOS FUEROS.”, y la Jurisprudencia 18/98 de rubro “LEYES PRIVATIVAS. SU DIFERENCIA CON LAS LEYES ESPECIALES.”

El criterio para incluir a quienes hoy están en esa lista tiene ser que objetivo y formal, no subjetivo o *ad hoc*.

En otras palabras, el ámbito personal de la pregunta no puede estar dirigido a un individuo o individuos en particular, como si su carácter y atributos fuesen la motivación para deliberadamente diseñar una consecuencia jurídica en su contra.

98. Finalmente, debe recordarse que, como lo ha determinado la Primera Sala, nuestro modelo constitucional excluye al derecho de autor e impone un paradigma de derecho penal del acto, lo que debe entenderse como el rechazo constitucional de hacer objeto de los procesos penales los atributos personales de los indiciados, para delimitarse a investigar actos¹⁵. Aunque esta doctrina se refiere a la materia penal, los principios subyacentes deben entenderse transversales a distintas materias, por ser de naturaleza constitucional.
99. Por estas razones, al observarse que la pregunta del Presidente de la República no guarda congruencia con la materia de la consulta, este Pleno procede a cumplir con su obligación legal de modificarla, en términos del artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de la materia, para quedar de la siguiente manera:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

100. Esta pregunta reformulada tiene simetría con la materia de la consulta, que consiste en el esclarecimiento de los hechos del pasado, mediante el ejercicio de las facultades discrecionales de los órganos

¹⁵ Tesis de jurisprudencia 21/2014 de la Primera Sala, visible en el Libro 4 (marzo de 2014), Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: “DERECHO PENAL DE ACTO. RAZONES POR LAS CUALES LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE DECANTA POR DICHO PARADIGMA (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 1º, 14, TERCER PÁRRAFO, 18, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 22, PRIMER PÁRRAFO).”

representativos, cuyo propósito incluye un abanico de posibilidades amplio que van desde la obtención de resultados con un valor histórico y político, así como la obtención de elementos necesarios para iniciar los procedimientos de responsabilidad pública correspondientes.

101. Finalmente, se procede a justificar las razones por las cuales esta Suprema Corte se inclinó por la referida redacción de la pregunta.
102. Este Pleno considera que al referirnos a *“las acciones pertinentes”*, se clarifica que, de reunirse los requisitos, las autoridades vinculadas retienen un margen de acción para elegir entre varias posibilidades, los cursos de acción más convenientes. Los ciudadanos no acudirían a opinar si quieren que las autoridades realicen o no una sola acción, sino que, como lo establece la Constitución, acuden a opinar sobre un tema de trascendencia general, correspondiendo a las autoridades determinar cómo actuar en consecuencia.
103. Se especifica que es *“con apego al marco constitucional y legal”*, ya que al consultarse a la población debe aclararse que cualquiera de esas acciones pertinentes de las autoridades vinculadas encuentra un límite en aquellos contenidos obligacionales, que están protegidos por los principios de seguridad jurídica y legalidad. Una vez más, las obligaciones legales, los derechos adquiridos y todas aquellas facultades regladas con las que se topen las autoridades deben entenderse fuera de la consulta popular, pues su cumplimiento no es potestativo para ninguna autoridad. Deben cumplirse a pesar de existir una opinión popular vinculante en contra.
104. También se decidió incluir el enunciado *“para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”* para precisar a la población que no se le está preguntando si quiere que se cumpla una facultad de ejercicio obligatorio, como puede ser la apertura de una carpeta de investigación por parte de la autoridad competente; en general, todas estas facultades

regladas se han dejado fuera de la presente consulta, por las razones ya expuestas. En la pregunta se retoma la formulación “*proceso de esclarecimiento*” de la exposición de motivos de la solicitud analizada, para destacar que se le consulta a la población si quiere que, previo a cualquier curso de acción ya regulado (en el ámbito penal, político o administrativo), se haga un desvelamiento del pasado, en términos amplios, mediante la creación de mecanismos complementarios. Sin embargo, esta amplitud temporal halla un límite personal: se centra en la actuación de actores políticos relevantes.

105. Es importante en este punto reiterar que los derechos de acceso a la justicia y una reparación integral de las víctimas y los ofendidos, así como el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad, son garantizados principalmente a través del cumplimiento de las obligaciones de investigación, de procuración e impartición de justicia de las autoridades estatales, previstas tanto en la Constitución como en tratados internacionales. Este es el campo de las facultades regladas, excluidas del ámbito de la consulta. Sin embargo, estos instrumentos normativos no prohíben ni impiden a las autoridades estatales competentes el establecimiento de mecanismos o cauces institucionales complementarios; en todo caso, este sería el campo de las facultades discrecionales, que integran la materia de la presente consulta.
106. Finalmente, se precisa al final de la pregunta que ello, es “*encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas*”, en el entendido de que la idea del esclarecimiento debe poner un acento en estos fines, pues ese debe ser el prisma desde el cual las autoridades vinculadas deben ejercer sus facultades discrecionales.
107. Así, formulada, la pregunta: 1) Se ajusta a la materia; 2) No se considera tendenciosa, ni contiene juicios de valor; 3) Emplea lenguaje neutro,

sencillo y comprensible; y, 4) Permite producir una respuesta categórica en sentido positivo o negativo.

108. En consecuencia, al haberse determinado que la materia de la consulta es constitucional, en los términos fijados por este Pleno y una vez modificada la pregunta propuesta para ajustarla a los requisitos legales exigibles, se

RESUELVE:

PRIMERO. Es constitucional la materia de consulta popular a que este expediente se refiere.

SEGUNDO. La pregunta aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de lo previsto en el artículo 26, fracción II, de la Ley Federal de Consulta Popular, es la siguiente: *“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”*.

Notifíquese al Senado de la República y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

En relación con el punto resolutivo primero:

Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá con salvedades, Esquivel Mossa, Franco González Salas con salvedades, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo con salvedades, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de

REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA MATERIA DE CONSULTA POPULAR 1/2020

Larrea con salvedades, respecto de los considerandos primero, segundo, tercero y cuarto relativos, respectivamente, a la competencia, a la legitimación, a la oportunidad y a la procedencia de la revisión.

Se aprobó por mayoría de seis votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena con precisiones en cuanto a su vinculatoriedad, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ríos Farjat, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea respecto de la constitucionalidad de la materia de la consulta. Los señores Ministros Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández apartándose de algunas consideraciones y Laynez Potisek votaron por que es inconstitucional. La señora Ministra Piña Hernández anunció voto particular.

En relación con el punto resolutivo segundo:

Se aprobó por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas obligado por la mayoría en la materia de la consulta y con reserva de criterio, Pardo Rebolledo obligado por la mayoría en la materia de la consulta, Ríos Farjat, Pérez Dayán con reservas en la temporalidad y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea respecto de la pregunta de la consulta popular. Los señores Ministros Aguilar Morales, Piña Hernández y Laynez Potisek votaron en contra. El señor Ministro Franco González Salas anunció voto concurrente.

El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados, dejando a salvo el derecho de los señores Ministros de formular los votos que consideren pertinentes.

**REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA
MATERIA DE CONSULTA POPULAR 1/2020**

En la sesión privada ordinaria celebrada el quince de octubre de dos mil veinte se aprobó el texto del engrose relativo a la revisión de la constitucionalidad de la materia de consulta popular 1/2020, solicitada por el Presidente de la República, por unanimidad de seis votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, con salvedades sobre el párrafo cuya modificación se aprobó en sesión privada, Esquivel Mossa, Ríos Farjat, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea.

El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea declaró que el texto del engrose de la sentencia emitida en la revisión de la constitucionalidad de la materia de consulta popular 1/2020, solicitada por el Presidente de la República, quedó aprobado en los términos antes precisados. Doy fe.

Firman los señores Ministros Presidente y el encargado del engrose con el Secretario General de Acuerdos que da fe.

PRESIDENTE

MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA

ENCARGADO DEL ENGROSE

MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA

LATO